

LA NO-RECUPERACIÓN DE COSTES EN EL SEGARRA GARRIGUES: LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Annelies Broekman* y Susanna Abella**

*Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua**

*Plataforma en Defensa de l'Ebre***

RESUMEN

La Directiva Marco de Aguas (DMA) (CE/2000/60) establece que los Planes de Gestión de Cuenca tienen que indicar como se plantea recuperar los costes de las inversiones vinculadas a la gestión del agua y desarrollar una tarifa que permita recaudarlos de manera adecuada.

Tomando de referencia el caso del Canal Segarra Garrigues, este análisis revela una recuperación de costes reales entorno al 10% como máximo.

La situación de endeudamiento de la administración y el hecho que las empresas involucradas en la gestión del canal son las mismas que están gestionando el abastecimiento en la Región Metropolitana de Barcelona ponen la base para una interconnexión de la cuenca del Segre (Cuenca del Ebro) a las Cuencas Internas de Catalunya vía un banco público de agua gestionado por la Generalitat. Sin embargo si en origen la gestión del agua es privada y en el destino también, ¿qué hay de gestión pública? Los gastos de transacción.

Palabras Clave: regadío, costes, mercantilización, PHCE, DMA

*“La modernización es clave para la agricultura, pero inasumible para los agricultores,”
de forma que “vender el agua podría ser una buena manera de financiarla”
Joaquím Llena – Ex-Consejero de Agricultura¹*

1. Introducción.

La DMA es en muchos sentidos una de las legislaciones ambientales más ambiciosas de Europa. Invita a un cambio de perspectivas en el modelo de gestión al poner el estado cualitativo de las masas de agua en el centro del enfoque. No obstante, la sociedad española no consigue adoptar los principios de base y las líneas guía correspondientes que implican realizar un profundo cambio en las políticas tradicionales de gestión del agua. Este cambio de enfoque en la redacción de los planes de cuenca, tan necesario como urgente, está encontrando obstáculos de diferente naturaleza, entre los cuales tiene un papel central la mala gestión económica de los fondos públicos y una creciente presencia del sector privado.

Este problema no está circunscrito a España. Como se ha indicado en el Blueprint², en muchos estados miembros resulta especialmente difícil implementar una mayor transparencia de las inversiones en infraestructuras y la coste-eficacia de las medidas de gestión, así como las garantías de viabilidad y equilibrio económico de la gestión del ciclo del agua. A nivel Europeo,

¹ Diario El Segre 09/02/2008

² http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm (Comunicación de la Comisión Europea)

la interpretación de “recuperación de costes” y, en general, la óptica de financiación del agua refieren a posturas fuertemente neoliberales³. De hecho, desde los movimientos en defensa del agua hemos acuñado el término de “*mercantilización del medio natural*” para referirnos a todos aquellos casos en que se financian con dinero público medidas que priman el interés económico sectorial y que obstaculizan la preservación de la funcionalidad de los ecosistemas hídricos. Sin embargo, el creciente interés político de hablar sobre la *economía del agua* constituye también una importante oportunidad para generar propuestas más cercanas a las necesidades de la ciudadanía y los territorios.

Esta comunicación quiere recoger algunos aspectos de interés para el desarrollo de una investigación política por una gestión económica del agua más transparente y a beneficio de la vida⁴. En el marco de la interpretación del concepto de recuperación de costes en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), se centra en ilustrar un ejemplo emblemático de la mercantilización del agua impulsado por la falta de viabilidad económica de una faraónica infraestructura de regadío, el Canal Segarra-Garrigues, y su relación con las políticas de abastecimiento de la Región Metropolitana de Barcelona.

2. Algunos aspectos de la gestión económica del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE)

La descripción de los aspectos críticos inherentes a la interpretación de la “recuperación de costes” en la legislación española y una análisis completa de como esto se refleja en el PHCE va más allá de los objetivos de esta comunicación. Sin embargo, exponemos algunos puntos interesantes que ilustran como el sector privado afecta la calidad económica del plan y el mal uso del presupuesto reservado para medidas ambientales, relevantes para enmarcar el caso de estudio.

2.1 La contabilidad del PHCE se basa sobre meras estimaciones.

Las previsiones presupuestarias del PHE cuantifican una inversión anual de 800 M€ desde la entrada en vigor hasta su vencimiento. En el anexo 9 de la memoria del PHCE se indica que un 38% de este esfuerzo inversor se aporta desde el sector privado (sin especificar en qué términos); el restante 64% se financia en un 62% por el presupuesto General del Estado y en un 38% por las Comunidades Autónomas y entes locales.

En el mismo anexo se declara abiertamente que las dificultades de control contable hacen que “*En numerosas ocasiones la discriminación de lo gastado y recaudado en la cuenca del Ebro debe ser una mera estimación.*” Se indica que esta desafortunada situación es debida a una falta de coordinación y acceso a los datos debido a la división entre entidades competentes, a la heterogeneidad de criterios y al formato de registro de los datos contables generadas por las entidades administrativas. De hecho, el PHCE indica, mediante fichas individuales, el seguimiento contable de las entidades prestatarias de servicios del agua. En tal apartado se admite que esta información no es completa y de suficiente calidad, indicando que “*la fiabilidad del*

³ Véase por ejemplo <http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/>

⁴ La presente comunicación se basa en informaciones elaboradas de manera más extensa en el informe “*Implementación de los conceptos de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua en España: el caso del Canal Segarra-Garrigues.*” Disponible en: <http://dmadeltaebre.blogspot.com.es/>

análisis global de recuperación de costes siempre dependerá de la fiabilidad de la contabilidad de las entidades que prestan servicios del agua. En la medida en que se mejore la transparencia de las cuentas de los organismos públicos, privados y mixtos que gestionan el agua, la sociedad podrá contar con una mayor información de la economía del agua en la Demarcación del Ebro.”

Asimismo es remarcable que el mismo PHCE imputa a la *“proliferación de empresas estatales, autonómicas y municipales, e incidencia tanto del Plan General Contable de sociedades como del Plan General de Contabilidad Pública”*, además del *“uso de fórmulas de gestión público–privadas”*, consideradas *“de gran interés financiero y operativo”*, pero cuyas cifras económicas no se reflejan en la contabilidad de los entes públicos.

Podemos afirmar entonces que la presencia del sector privado en la gestión del agua se puede considerar como un elemento que obstaculiza la transparencia y racionalidad de gestión económica del agua. A raíz de esta diagnosis, se ve reforzada la llamada de los movimientos en defensa del agua para una reestructuración de la administración del agua y la protección de la gestión pública. Como se evidenciará en el caso de estudio del Segarra-Garrigues, en muchos casos las obras hidráulicas determinan un ingente flujo de dinero público hacia la capitalización de intereses privados, sin lograr, en el proceso, incrementar la mejora de los intereses sociales que justificaban la intervención.

2.4. Recuperación de costes ambientales y la modernización de regadíos como medida ambiental

El PHE declara que, siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), se han valorado los costes ambientales en unos 6.000 M€ para el periodo de planificación 2010-2015. El actual Plan considera que se recuperarán 2.750 M€ de estos costes con horizonte 2015 a través de las medidas ambientales propuestas, mientras que en el próximo ciclo de planificación (2016-2027) se plantea recuperar 9.000 M€.

Actualmente para la valoración de costes ambientales asociados a los servicios del agua, la IPH establece que *“los costes ambientales se valorarán como el coste de las medidas establecidas para alcanzar los objetivos ambientales, incluyendo las adoptadas tanto por las administraciones competentes como por los usuarios.”*

En base a esta línea interpretativa las fichas resumen del Plan indican que el 57% de las inversiones previstas se destinarán al cumplimiento de objetivos ambientales. Este dato sería muy esperanzador, pero al contrario, un estudio más detallado revela, desafortunadamente, que este criterio permite contabilizar obras y medidas como *ambientales* cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, se contabilizan los cánones de vertido como recuperación de costes ambientales. Es decir, se están contabilizando recaudaciones por el “uso ambiental” del río como si fueran medidas de mejora de su estado ecológico.

Asimismo, el PHCE clasifica la modernización de regadíos como medida ambiental (programas A8 y A12), avalado por una supuesta recuperación de caudales y reducción de la contaminación por pesticidas y fertilizantes. Estas valoraciones de beneficio ambiental se basan en datos recogidos a nivel de parcela experimental sin ningún estudio con rigor científico que evidencie como a nivel de cuenca la modernización haya generado ahorros de agua y una reducción de la contaminación difusa. De hecho, la experiencia de la última década con la modernización, indica que no ha habido ninguna recuperación de caudales destinados a objetivos ambientales, ya que no se han revisado las concesiones otorgadas. Además la presurización de los regadíos ha incrementado la superficie total regada al poder acceder a zonas más elevadas, intensificando los cultivos en zonas más marginales, lo que conlleva un mayor uso de agua y fertilizantes.. Esta

situación la confirma el análisis Blueprint desarrollado por la Comisión Europea, sobre temas de escasez y sequía⁵.

La modernización tampoco ha comportado una mejora en la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas por la eliminación de contaminación difusa, tal como se pone en evidencia en los estudios anuales de Control de las masas de aguas (CEMAS)⁶ realizados por la Confederación Hidrográfica. El uso de técnicas de regadío presurizado, además, representa un incremento importante en el consumo eléctrico llegando a representar el 2,7% del consumo eléctrico total en España en el 2010⁷. Este elevado consumo unido al incremento constante de tarifas pone en cuestión la viabilidad de la explotación de la modernización de regadíos .

3. El caso Segarra-Garrigues.

Independientemente si las interpretaciones de la DMA por parte del Estado Español serán consideradas correctas o no por la Comisión Europea, es obvio que para la legislación vigente, el balance financiero de las medidas de gestión y de las obras de regulación tienen que caracterizarse por la transparencia y racionalidad. Esto no es objeto de interpretación ni de debate.

Hemos elegido centrar el análisis de recuperación de costes en este caso concreto, el Canal Segarra-Garrigues, porque pensamos que es muy emblemático y similar a casos como el Canal de Navarra y muchas otras infraestructuras de regadío o de regulación, ejecutadas o planteadas por el Gobierno Español en este ciclo de planificación.

Dejando al lado los aspectos más complejos del principio de recuperación de costes, nos queremos centrar en el manejo de los costes reales que comporta la construcción de esta infraestructura, tal y como se presentan en el Plan Hidrológico de la Cuenca Ebro y sus consecuencias sobre la gestión del agua en el territorio.

3.1 Datos generales del Proyecto⁸

El Canal Segarra-Garrigues (S-G), es una infraestructura que afecta a la Cuenca del río Segre, uno de los afluentes más importantes del río Ebro. Este canal está asociado al Embalse de Rialp, infraestructura realizada previamente en los años 90. Se trata de una obra monumental de coste inicial entorno al 1.5M€, actualmente ejecutada en un 66%.

El proyecto de transformación en regadío del Canal de Segarra-Garrigues prevé la puesta en riego de un total de 70.150 ha ubicadas en las comarcas de la Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues y Segrià que, actualmente, se dedican principalmente a la producción de cereal, olivos y almendros. La mayor parte de la zona afectada por el nuevo regadío está caracterizada por un ecosistema de tipo estepario, tradicionalmente de cultivos de secano en diversas zonas

⁵ La comunicación sobre Escasez y sequía es COM-2012-672 recogida en el Blueprint, disponible en http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

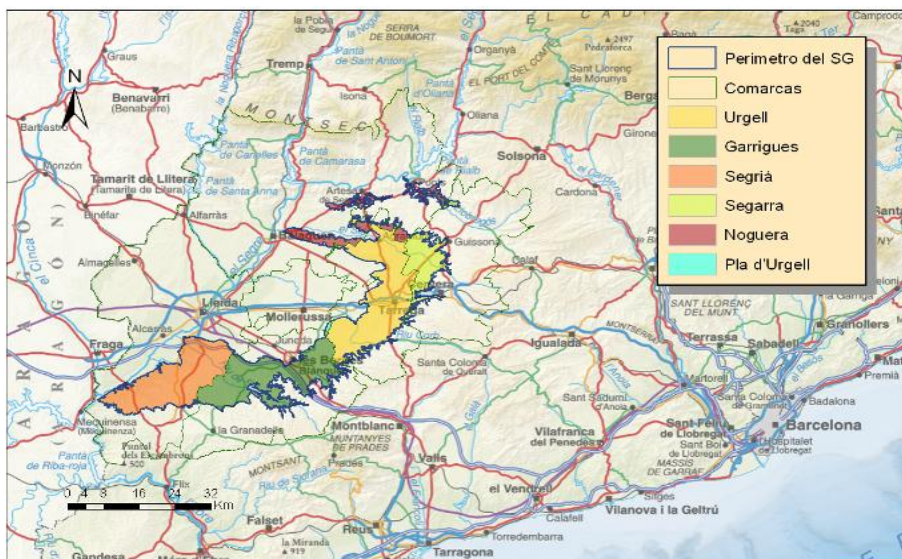
⁶ http://195.55.247.234/webcalidad/cemas/informes/2011_cemas/inicio.htm

⁷ <http://www.ingenieriadelagua.com/2004/download/17-3%5Carticle3.pdf>

⁸ Fuente Anejo X Programa Plan de Medidas del Borrador de Plan de cuenca (mayo 2012)

catalogada como ZEPA⁹. Precisamente la delimitación de zonas ZEPAs en la zona afectada por el Segarra-Garrigues ha sido motivo de una denuncia europea y diversas amonestaciones desde las instituciones comunitarias¹⁰.

Figura 1. Zona del Segarra Garrigues en la llanura de Lleida.



Fuente: <http://www.steppeahead.com/>

Después de un proceso jurídico muy largo y polémico, el 29 de septiembre del 2009 se publicó el Acuerdo de Gobierno GOV/150/2009, por el cual se aprobó la delimitación definitiva de diversas zonas de protección especial para las aves. En esta propuesta, se amplían los espacios ya declarados de protección con anterioridad, y se crean dos nuevos espacios, con lo que el total protegido dentro de la futura zona regable asciende a 42.000 ha. Esta superficie representa el 60% del área regable total previsto inicialmente por el proyecto, sin embargo nunca se ha redimensionado la obra en acorde con la nueva delimitación y que por tanto implicarían una reducción de la concesión prevista y también de las infraestructuras de transporte asociadas.

La demanda de agua total del Canal Segarra-Garrigues es de 342 hm³. Se diferencia en dos tipos de zonas en base a la dotación asignada: una zona a riego “completo” y una de “apoyo”. El actual PHCE prevé cubrir esta demanda mediante una estrategia múltiple: desde el embalse de Rialp (273 hm³/año) y dos captaciones directas situadas en el tramo bajo del río Segre aguas de la ciudad de Lleida (69 hm³/año). A su vez, la demanda procedente del embalse de Rialp se subdivide en 100 hm³/año de la regulación propia del embalse, 125 hm³/año de la armonización del río Noguera Pallaresa y el embalse de Albagés situado en la cola del canal que recogerá 48 hm³/año de los caudales sobrantes para riegos de apoyo.

⁹ Zona de especial protección para las aves (ZEPA) Dir 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes

¹⁰ Sentencias C-186/06 y C-235/04

El agua del río Noguera Pallaresa se utiliza actualmente para explotación hidroeléctrica. Es de suponer que los caudales que se podrán utilizar para el canal Segarra Garrigues se obtendrán a través de una negociación con las partes interesadas¹¹. Es una obra de particular interés: de ella depende la viabilidad del proyecto del canal, sin embargo la administración no ha completado los estudios de viabilidad ambiental ni se conocen las condiciones exactas de los gastos que conlleva la compensación a los actuales concesionarios hidroeléctricos¹².

El canal Segarra-Garrigues abarca una de las zonas con mayor contaminación difusa de toda la cuenca del Ebro y la mayor zona de aguas muy modificadas tanto a nivel de agua superficiales como subterráneas de toda la cuenca del Ebro. Sin embargo en la PHCE se limita a decir simplemente que *“no parece que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta transformación en regadío”*¹³ ignorando el principio básico de prevención que debería imperar en este tipo de masas tan deterioradas.

3.2 Mapa de actores y competencias.

El mapa de actores es muy complejo, caracterizado por un fuerte componente de relación público-privado. De hecho, muchas empresas privadas tienen un papel fundamental en la gestión de los flujos financieros relacionados con esta infraestructura.

El mapa de actores se ha modificado a lo largo de los años, incluyendo cambios en el accionariado, en la estructura de los organismos de gestión, etc lo que hace imposible acceder a una información clara sobre las diferentes inversiones y su gestión a lo largo de la evolución de la infraestructura.

En la tabla 1 se detallan a grandes rasgos los principales actores y las relaciones entre ellos, así como el papel que tienen en cada uno de los grandes bloques en que se divide la infraestructura del Segarra-Garrigues:

- 1- Red de transporte: canal Segarra-Garrigues propiamente dicho
- 2- Red de distribución hasta pie de parcela
- 3- Red de distribución dentro de la parcela
- 4- Concentración parcelaria

Como podemos observar a partir del mapa de actores, tanto la administración autonómica como la estatal tienen un papel clave en la ejecución del Segarra-Garrigues. Durante estos años el proyecto del Segarra Garrigues ha absorbido grandes cantidades de dinero autonómico, siendo la mayor inversión pública de Cataluña desde la construcción del tren de alta velocidad. Para ello la Generalitat ha avalado diferentes créditos para poder continuar la construcción de esta infraestructura, contribuyendo a empeorar la elevada carga financiera actual de la Generalitat de Catalunya.

De hecho, la Generalitat de Catalunya asume el 100 % los gastos de concentración parcelaria y la red de distribución a pie de finca y un 50% en la red de transporte. Indirectamente también

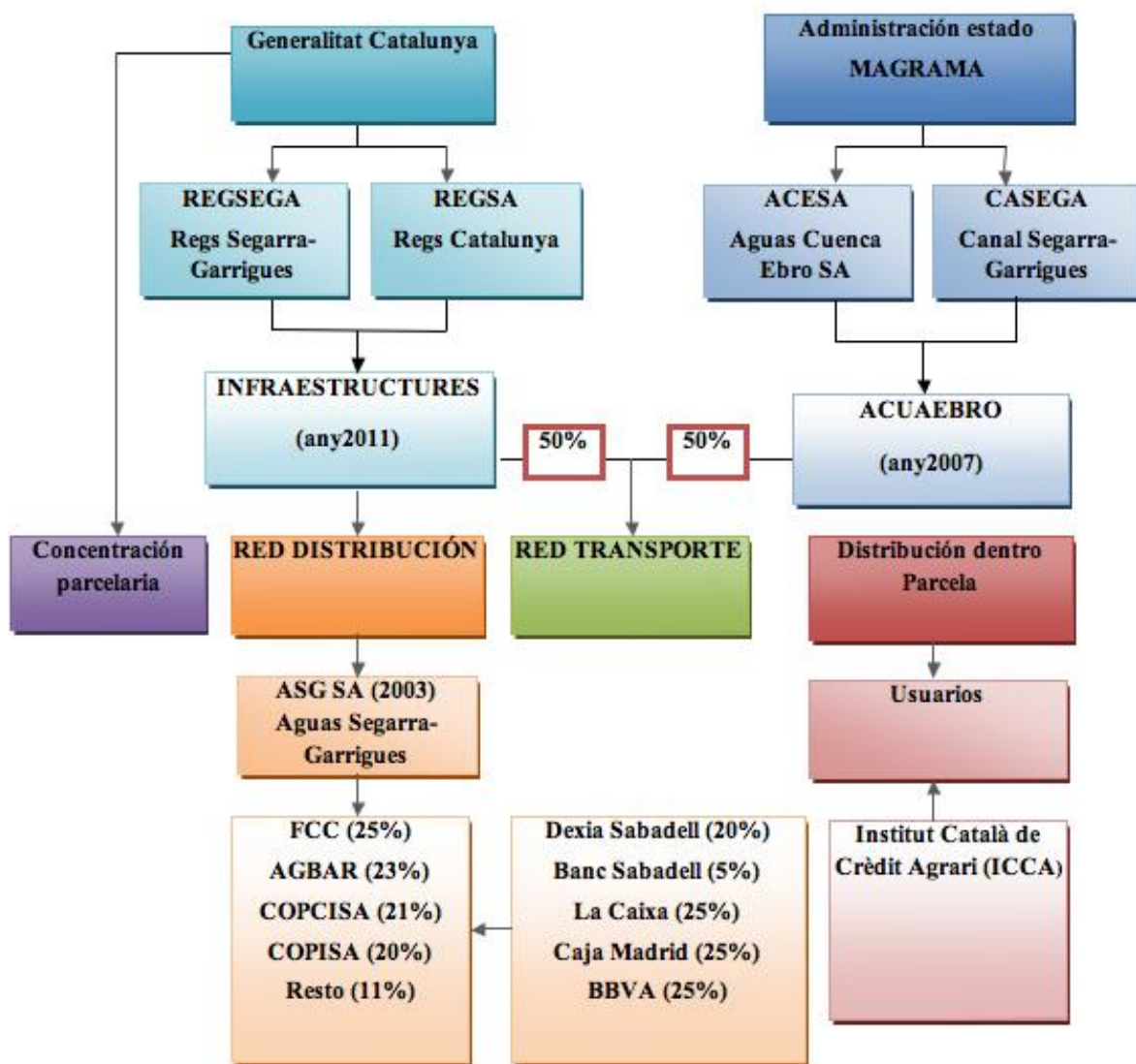
¹¹ <http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20081223/medi-ambient-plantea-llevar-agua-del-segre-barcelona-2025/print-241415.shtml>

¹² Obra clasificada *en estudio* en tabla B Anejo X -pag 6- sin embargo en AP II.II Anejo X -pag 2763- se describe la opción técnica elegida aún que falte el informe de viabilidad ambiental y se plantea como medida a realizar durante este ciclo de planificación.

¹³ AP II.II Anejo X pagina 2706

financia las inversiones para la distribución de riego en cada parcela (aspersores, pivotes, goteos, etc.) a través de una línea de crédito especial en entidades financieras del Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA), además de otras ayudas a fondo perdido incluidas en el contrato global de explotación.

Tabla 1 Mapa actores Segarra Garrigues



Fuente: Elaboraci3n propia

En 2002 la Generalitat de Catalunya adjudic3 a trav3s de REGSEGA¹⁴ el contrato de ejecuci3n de la infraestructura a un grupo empresarial que actúa con el nombre Aguas del Segarra-Garrigues

¹⁴ RESEGA: Reg Sistema Segarra-Garrigues SLU (BOE 23 Diciembre 2002)

S.A por un importe de 1.103.005.582 € (IVA 16% incluido). En la tabla 2 podemos observar la composición de los accionistas de esta empresa, entre los cuales también figuran AGBAR, SOREA y AQUALIA, grandes interesados en el desarrollo de las políticas del agua en Cataluña.

Tabla 2 Composición de los accionistas de Aguas del Segarra-Garrigues S.A

Composición accionarial ASG	
FCC Construcción, S.A.	24%
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	22%
Copcisa, S.A.	21%
Copisa, Constructora Pirenaica, S.A.	20%
Benito Arno e Hijos, S.A.	5.5%
M y J Grúas, S.A.	1.375%
Aridos Roma, S.A.U.	1.375%
Constructora de Calaf, S.A.	1.375%
José Antonio Romero Polo, S.A.	1.375%
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.	1%
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A.	1%

Fuente: Web Aigues-Segarra Garrigues ¹⁵

En el 2005 la Generalitat avaló 17 millones de euros a esta empresa para la construcción de la red de transporte, pese a que faltaba “*la firma de los regantes*” que le garantizaba un compromiso firme de cara a la sucesiva recuperación de costes.¹⁶ En el 2010 se otorga otro préstamo de 105 M€¹⁷ que implica un importante aval de la Generalitat para la construcción del canal de distribución a REGSEGA con encargo de ejecución a Aigües del Segarra-Garrigues.

En el 2012, con la creación de Infraestructuras.cat (BOE del 24 julio 2012)¹⁸ esta empresa pública asume el endeudamiento de las sociedades absorbidas de Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA), Regs de Catalunya, S.A. (REGSA) ¹⁹ y Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A. (REGSEGA). En el mismo BOE se aplica el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, que permite, de manera extraordinaria, cambiar las condiciones de aval y endeudamiento de la Generalitat, más allá de lo establecido en la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalitat de

¹⁵ Tanto Aqualia como Sorea son grupos filiales de FCC y Sociedad General de Aguas de Barcelona que son las dos empresas mayoritarias.

¹⁶ http://elpais.com/diario/2005/06/30/catalunya/1120093662_850215.html

¹⁷ http://www.gnlauditores.com/files/20110609113703_5599_bfca14f0-32c1-4a71-82fe-9b37a91224aa.pdf

¹⁸ <http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9869.pdf>

¹⁹ REGSA: Regs Catalunya SLU

Catalunya para 2012. Esta situación claramente pone el peso de la deuda en la administración mientras las empresas privadas están mucho más protegidas financieramente.

3.2 Recuperación de costes

Dada la dispersión de datos sobre esta infraestructura, se tomaran como referencia los datos facilitados en *Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015 (Anejo X Apéndice IIB)* “*Actuaciones Pendientes Del Proyecto Del Canal De Segarra-Garrigues A Considerar En El Plan Hidrológico De La Cuenca Del Ebro 2009.*”

Según estos datos, el coste total de la obra estimado en el 2008 es de 1.583M€ que se plantean imputar a los regantes con contribuciones de 6.927 €/ha para la zona de dotación total (66,6%) y 5.377 €/Ha para el riego de apoyo (33,4%). Si se recaudaran estas cantidades (449.612.395 € en total) estaríamos teóricamente recuperando un 28% de la inversión global. Este dato se ve afectado por condicionantes que no están incluidos en el proyecto como por ejemplo que la zona regable es de un 60% menor de lo planteado.

Ya en el mismo plan se considera que estas indicaciones no son vinculantes y remarca que “*El coste del agua aún está por determinar. Se conoce la tarifa marcada por la empresa adjudicataria de la explotación del sistema, en la que se incluirá el coste de la energía, el mantenimiento y el fondo de reposición y que tendrá un valor inicial de 0,061 €/m³ (a revisar en función del coste de la energía y del IPC). A este valor se le ha de añadir los conceptos de: repercusión del coste de la red de transporte, coste de transporte, canon de compensación a las hidroeléctricas.*”

En el 2010, el precio del agua correspondiente a Aguas del Segarra-Garrigues (ASG) se fijó con Regsega en 0,0906 €/m³ (precio 2010), con un total de 12 céntimos por el global del servicio compuesto por el canon de Rialp, la comunidad de regantes y el coste de la inversión del canal principal²⁰. En el acuerdo se especificó que no se emitiría ninguna factura hasta que el precio global se aprobara de forma definitiva por la Generalitat de Catalunya. Este precio se fijó primero en el Acuerdo de Gobierno²¹ del 17 de enero 2012, y posteriormente negociado a la baja en el Acuerdo de gobierno del 15 Marzo 2013, resultando en una tarifa binómica como ilustra la tabla 4.

Tabla 4 Tarifa binómica actualmente vigente en el Segarra Garrigues

Dotación m ³ /ha	Precio fijo por ha	Precio €/m ³
6.500	110	0,09600
3.500	95	0,09600
1.500	85	0,09600

Fuente: Generalitat de Catalunya

En la hipótesis que se vendiera toda el agua, con esta tarifación los regantes que más dotación reciben pagarán alrededor del 10% de los costes del proyecto, sin contabilizar IPC ni costes energéticos, y con disponibilidad de una financiación a 25 años a interés 0.

²⁰ El canal principal en otros momentos del proyecto se llama *red de transporte*.

²¹ http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20120117/20120117_AG.pdf

4. Conclusiones

A la luz de la síntesis de algunos aspectos del actual borrador del PHCE, y del hecho que en los últimos 10 años se ha incrementado la superficie de regadío en España en 176.191 Ha²² y a la vez, en ese periodo los recursos hídricos disponibles se han visto reducidos en un 15%, consideramos que una planificación basada meramente sobre criterios económicos sectoriales, además sin ser respaldado por un sólido plan financiero, no cumple con los principios de la DMA (ni del sentido común).

Respecto a los 70 150 ha de regadío del Canal S-G previstas en el PHCE, actualmente se están regando solo 3.277 ha sin un compromiso vinculante de los demás potenciales beneficiarios. Es más que probable que nunca se pueda llegar a un equilibrio económico y financiero del canal tal como está planteado ahora.

Según nuestras estimaciones, un nivel de recuperación coherente con una gestión económica responsable del proyecto, rondaría los 30c€/m³, más cerca de la capacidad de pago por usos urbanos que por regadío. Al contrario del regadío, la demanda de agua doméstica es poco *elástica*, osea, a pesar del incremento del precio las personas difícilmente pueden renunciar al servicio. Esto hace del abastecimiento urbano de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) un negocio muy apetecible. De hecho, la distribución del agua *en baja* (desde los depósitos municipales a las casas) ya es gestionada por la empresa AGBAR (actualmente 75% SUEZ) desde hace mucho tiempo y con considerables beneficios (volumen de negocio actual de 12.000 M€). Además, también el abastecimiento *en alta* (desde las fuentes a los depósitos municipales) actualmente gestionada por la empresa pública ATLL, se está cediendo a las mismas empresas que han invertido en el Canal S-G.

El consumo de agua en Barcelona es uno de los más bajos de España, con 105,8 litros por habitante y día²³. Aquellos que tienen interés en vender más agua en la RMB apuntan a un aumento de la población. El plan de gestión actual estima un crecimiento de población de 800.000 nuevas viviendas en el horizonte 2025, unas 20 veces más de las estimaciones del INE. Esta manipulación estadística justifica la necesidad de buscar más fuentes de abastecimiento, como por ejemplo las aguas “sobrantes” del canal Segarra Garrigues²⁴. Para ello es necesario que estas aguas, actualmente concedidas para riego, se adjudiquen formalmente también para abastecimiento: recientemente se ha aprobado abastecer a 4 municipios de la Conca de Barberà desde el canal, constituyendo el primer paso para que pueda fluir hacia la RMB²⁵ como ya se planteó en diferentes ocasiones²⁶.

La legislación vigente prevé la aprobación del gobierno central cada vez que se quiera transvasar agua de una cuenca a otra, por esto, para llevar el Segre hacia la RMB se propone instituir un banco público de agua, gestionado por la Generalitat; pero, si en origen la gestión del agua es de AGBAR, y en el destino también, ¿que hay de público? Los gastos de transacción.

²² "Perfil Ambiental de España, 2011", editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

²³ “El consum d’aigua contiuu baixant a l’àrea metropolitana” La Vanguardia 06/06/2013

²⁴ <http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130415/54372423141/trabajadores-denuncian-trasvase-ebro-barcelona.html>

²⁵ http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/07/catalunya/1362655999_719037.html

²⁶ <http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20081223/medi-ambient-plantela-llevar-agua-del-segre-barcelona-2025/print-241415.shtml>